

Con la 4T, RETROCESOS EN SALUD Y POBREZA en primera infancia

Investigadores del Early Institute aseveran que en este sexenio no sólo se contuvo la inversión destinada a primera infancia, sino que se eliminaron o sustituyeron programas sociales que habían paliado las carencias que sufre este grupo etario. Los datos del instituto revelan que uno de cada diez niños de entre cero y cinco años está en pobreza extrema, mientras que 50% está en pobreza, esto es, uno de cada dos infantes.



Derecho a la salud, tema pendiente
Foto: Germán Canseco

GLORIA LETICIA DÍAZ

Representan 10% de la población en México, son los más pobres, los más vulnerables y también los más olvidados durante décadas, a los que los gobiernos de distintas denominaciones políticas les han destinado menos de 1% del Producto Interno Bruto (PIB). Se trata de más 12 millones de infantes mexicanos de entre cero y cinco años, etapa a la que se identifica como la primera infancia.

En la desatención de esta población, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha sido la excepción, alertan Renata Díaz Barreiro Castro y Cándido Pérez Hernández, investigadores de Early Institute, organización civil dedicada a la incidencia en políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de la primera infancia. Para ello ha construido el Sistema de Indicadores de la Primera Infancia (SIPI), una plataforma que monitorea las condiciones de salud, nutrición, cuidado responsable, educación, seguridad y protección y pobreza de la niñez de entre cero a cinco años de edad en México.

Con base en datos oficiales, sistematizados y concentrados en el SIPI, en entrevista en conjunto los investigadores del Early Institute han prendido algunos focos de alerta en el contexto de la conclusión del actual sexenio y en vistas al próximo cambio de gobierno que surja de la elección del 2 de junio próximo.

Coordinadora del proyecto SIPI, Díaz Barreiro destaca como "uno de los focos rojos" que tienen que tomarse en cuenta para la próxima administración es que la inseguridad en el país también está afectando de manera preocupante a la población menor de cinco años.

Tras alertar que un estudio de 2003 de la oficina de Drogas y el Delito de la ONU develó que "la tasa de homicidios intencionales en México es cinco veces más alta que el promedio mundial, que es de 5.8 por cada 100 mil habitantes, mientras que nuestro país es de 26 asesinatos

por cada 100 mil habitantes", Díaz Barreiro Castro consideró que "tenemos un problema definitivo de seguridad pública y esto también se ve reflejado y permeado en la niñez en México".

Como efectos de la inseguridad, expuestos en bases de datos públicos de INEGI y de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la investigadora destaca que 135 niños y niñas de primera infancia fueron asesinados en 2022; ese año se integraron dos mil 438 carpetas de investigación por violencia sexual contra esa población frente a dos mil 78 averiguaciones abiertas en 2021; en 2023 se tenían registradas 368 personas desaparecidas de primera infancia.

"Estamos hablando de una violencia terrible, como también lo es saber que al menos 93% de los delitos no se denuncian, y que 12% de mujeres, esto es seis millones de personas, habrían sido víctimas de violencia sexual antes de cumplir 15 años, sin que sepamos cuántas de ellas sufrieron los abusos en primera infancia", apunta Díaz Barreiro.

La investigadora del Early Institute advierte que la situación de inseguridad en primera infancia se agrava al considerar que prevalece un contexto de pobreza que dificulta el acceso a la justicia.

Abunda que precisamente otra señal de alarma es la persistencia de la pobreza extrema en México, que "no se modificó para nada en primera infancia, 12%, esto es, uno de cada diez niños está en pobreza extrema, mientras que 50% está en pobreza, esto es, uno de cada dos niños".

Tomando como parámetro las consideraciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de que una persona con pobreza extrema registra al menos tres carencias sociales, relacionadas con los derechos a la salud, a vivienda, educación, seguridad social, alimentación y los servicios, la investigadora advierte que es ahí donde los infantes resultan más afectados.

Primera infancia. Carencias

Foto: José Luis de la Cruz / Procesofoto



“Ha aumentado considerablemente el número de las personas con al menos tres carencias sociales, mientras en 2018 los datos estaban en 22%, en 2020 llegamos a 26% y en 2022 a 30%, es decir, entre 2020 y 2022 aumentamos la población en pobreza extrema en 15%, lo cual deriva en que están vulnerando los derechos más fundamentales de los niños, aunque no haya aumentado el número de pobres”, resalta la investigadora.

Pérez Hernández acota con números: hay cinco millones 900 mil niños y niñas de entre cero y cinco años pobres, y un millón 420 mil en situación de pobreza extrema, si se toma en cuenta que la población total es de 12 millones 226 mil 266 personas en ese rango de edad en México.

“Históricamente este sector de la población ha sido muy olvidado. En números generales a niños, niñas y adolescentes se destina más o menos 3% del gasto público con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), lo cual no tiene concordancia con lo que representa en la población, porque uno de cada tres mexicanos tiene entre cero y 17 años, pero en caso de primera infancia el porcentaje está aún más lejano de ser congruente con lo que representa en términos solamente de población, que es de entre 0.6 a 0.7% del PIB”, puntualiza Pérez Hernández.

Los investigadores alertan que en este sexenio no sólo se contuvo la inversión destinada a primera infancia, dando continuidad a periodos gubernamentales anteriores, sino que se eliminaron o sustituyeron programas sociales que en sexenios anteriores habían ayudado en algo a paliar las carencias que sufre este grupo etario, aunque no estuviera precisamente destinado a ese sector.

Uno de esos programas desaparecidos fue el de Estancias Infantiles, dirigido a padres y madres de 15 años y más, "con hijas e hijos de uno a cuatro años, sin acceso a seguridad social de manera directa o por parentesco con el jefe del hogar, en hogares con ingreso estimado per cápita por debajo de la línea de bienestar, que además se encuentre disponible, desocupada, subcontratada u ocupada en el sector informal". De acuerdo con el informe del Coneval, en 2017 se registró una cobertura de 310 mil 968 madres y padres solos, atendiendo a 327 mil 854 niños y niñas, para lo que se contó con un presupuesto de tres mil 118 millones.

Con diez años de operación, al cierre de 2017 el Coneval lo clasificó como "un programa social exitoso", que consistía en dar a cada madre o padre inscritos en el programa 900 pesos mensuales por niña o niño de entre uno a tres años 11 meses de edad, o mil 800 pesos si el menor presentaba alguna discapacidad, para lo cual el apoyo se ampliaba a niños de uno a cinco años 11 meses, recursos que se destinaban a la contratación de servicios de cuidado y atención infantil. De 2007 a 2017 el programa benefició a "un millón 825 mil 394 madres y padres solos y ha atendido a dos millones 174 mil 415 niños y niñas" de mil 300 municipios y dos mil 169 localidades, según datos del Coneval.

El programa contemplaba el financiamiento de nueve mil 399 estancias infantiles, a través del apoyo a personas morales y físicas con 70 mil pesos para adecuar espacios para atender a los menores.

A principios de 2019 el gobierno de Andrés Manuel López sustituyó ese programa por el de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, que se traduce en transferencias monetarias de mil 600 pesos bimestrales por beneficiario.

De acuerdo con el último informe del Coneval, en 2023 ese programa tuvo un presupuesto de dos mil 313 millones de pesos, para un universo de 335 mil 237 personas beneficiarias identificadas como "niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 23 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad por ausencia de uno o de ambos padres".

Los investigadores coinciden en que si bien las Estancias Infantiles estaban orientadas a la integración de las mujeres al mercado laboral, por ser tradicionalmente quienes atienden a la población infantil, los menores se veían beneficiados en términos de salud, educación, alimentación y cuidados especiales por un programa que contaba con la supervisión de una institución como el Coneval.

Ahora, con el nuevo programa, "aunque se dan transferencias monetarias, no alcanzan para acceder a las guarderías en México, ni siquiera sabemos el número exacto de estos establecimientos ni el impacto en niños y niñas en edad de educación inicial", dice Díaz Barreiro.

Añade Pérez Hernández: "Por la forma en que está diseñado el programa ahora, se supondría que esa transferencia tendría que ser destinada para cubrir una cuota dentro de un centro educativo de primera infancia, pero en la realidad las personas pueden hacerlo o no, no hay manera de darle seguimiento".

Entre los derechos más vulnerados por el abandono institucional figura el acceso a la salud y alimentación, retoma Díaz Barreiro.

"La población infantil que tenía esta carencia en 2018 era de 17.6%; en 2020 pasó a 31%, y en 2022 se amplió a 45%, esto significa que si medimos de 2020 a 2022, hubo un aumento de 50% en el número de niños y niñas que no tienen acceso a la salud; es un impacto muy grave".

Gracias a la sistematización de la información oficial, que se encuentra fragmentada en distintas bases de datos, a través del SIPI es posible dimensionar cómo se encuentra la población más vulnerable de México, en aspectos tan básicos como la evolución de la vacunación en primera infancia en los últimos cuatro sexenios.

De acuerdo con la plataforma, con base en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), la población de niños de un año con esquema de vacunación completo tenía un registro de 26.5% en 2000; seis años después, alcanzó a 78.4% de esa población; en 2012, la proporción era de 74.2%, para caer drásticamente a 19.9% en 2018 y empezar a recuperarse en 2021, con una cobertura de 31.1%, y en 2022 de 42.6 por ciento.

En cuanto a la alimentación, la investigadora resalta que 20% de los niños y niñas de cero a cinco años de edad no tiene acceso a alimentación nutritiva y de calidad, en tanto que 7.7% padece sobrepeso y obesidad.

Estos datos hablan de “los malos hábitos alimenticios sin duda, y que, si ya estamos partiendo de estos niveles de sobrepeso en primera infancia, van a tener un impacto también significativo cuando crezcan los niños en la infancia, adolescencia y vida adulta”, apunta Renata Díaz Barreiro.

Cándido Pérez Hernández resalta que “gran parte de la razón de ser del SIPI, el proyecto del Early Institute, es que la primera infancia tiene que ocupar un lugar preponderante dentro de las políticas públicas de nuestro país, dentro de nuestro marco normativo, dentro de las propuestas que se plantean para el siguiente sexenio, siendo una cuestión fundamental reconocer que es insostenible seguir pensando en un presupuesto como el que está actualmente, el nivel de preponderancia de la primera infancia debe reflejarse en un presupuesto que se ha planteado desde diferentes organismos internacionales”.

Renata Díaz Barreiro insiste en que considerando el nivel de impunidad que impera en el país y sobre todo en casos en los que menores son víctimas de delitos graves, “no puede ser que no haya una indignación por cada niño, niña o adolescente que sufre esos delitos. Es urgente que el sistema de seguridad tenga ya un cambio y que haya este acceso a la justicia, que si se abre una carpeta de investigación se cierre favorablemente, que haya resarcimiento y acompañamiento para las víctimas, que no sea un proceso revictimizante”.

Díaz Barreiro. Inseguridad en el país, “foco rojo”

Foto: Tomada de video

